

0012/2024

I

El artículo 5, apartado c), del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (“Ley de Seguridad Vial”) —LSV— atribuye al Ministerio del Interior la competencia para gestionar los cursos de sensibilización y reeducación vial. Por su parte, el artículo 62.5 LSV, en su segundo párrafo, dispone que dicha competencia alcanza a la determinación de la *duración*, el *contenido* y los *requisitos personales y materiales* de los cursos de sensibilización y reeducación vial, así como a los mecanismos de certificación y control de estos, que se regularán por orden de la persona titular del Ministerio del Interior, a saber:

*Artículo 62. Centros de formación y reconocimiento de conductores.
(...)*

5. Los cursos de sensibilización y reeducación vial se impartirán por centros que requerirán autorización administrativa previa, de acuerdo con lo que se determine sobre su funcionamiento y sus medios personales y materiales.

La determinación de la duración, el contenido y los requisitos personales y materiales de los cursos de sensibilización y reeducación vial, así como de los mecanismos de certificación y control de los mismos, se determinará por orden de la persona titular del Ministerio del Interior.

Por otra parte, el artículo 5.h) del citado texto refundido, prevé que, sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, corresponde al Ministerio del Interior la llevanza de *los registros de vehículos, de conductores e infractores*, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de manipulación de placas de matrícula, en los términos que reglamentariamente se determine.

El desarrollo reglamentario del Registro de Conductores e Infractores se contiene en los arts. 76 a 79 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. Dicho registro es gestionado por la Dirección General de Tráfico —art. 76.1—, y entre los datos

que en él deben figurar se encuentran las *condenas judiciales* que afecten a la autorización administrativa para conducir y las *sanciones administrativas que sean firmes impuestas por infracciones graves y muy graves* —artículo 77, letra i)—, y el *crédito de puntos* de que se dispone —artículo 77, letra k)—.

Las previsiones normativas que se citan concuerdan con lo dispuesto en:

- (i) El artículo 10 RGPD —*Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales*—, cuando dispone que el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas, (véase respecto de la consideración de las sanciones de tráfico como “condenas o infracciones penales” la sentencia del TJUE de 22 de junio de 2021, C-439/19).
- (ii) El artículo 86 del citado RGPD, cuando prevé —bajo el epígrafe *Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales*—, que los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública o u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en interés público podrán ser comunicados por dicha autoridad, organismo o entidad de conformidad con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento.

A mayor abundamiento, la propia Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, contempla también (i) tanto lo referente al tratamiento de datos de *naturaleza penal*, (ii) como lo relativo al tratamiento de datos sobre *infracciones y sanciones administrativas*, de modo que:

- *Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal.*
 1. *El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.*

2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

- *Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.*

1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá:

a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel.

2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.

3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Corresponde a la Jefatura Central de Tráfico, organismo autónomo a través de la cual ejerce sus competencias el Ministerio del Interior —ex artículo 6 LSV—, la llevanza y gestión conforme a derecho, y, en especial, con pleno respeto de la normativa de protección de datos, del registro de conductores e infractores, en el que constan —entre otras— las anotaciones sobre (i) titulares de permisos de conducción cuya recuperación parcial de puntos se pretenda, (ii) titulares de permisos con pérdida de vigencia y/o con pérdida total de los puntos asignados, (iii) y anotaciones relativas a la prohibición de conducir sobre personas condenadas por sentencia firme por la comisión de un delito castigado con la privación del derecho a conducir.

La Orden que se informa se dicta *en desarrollo* de diversos preceptos del Título IV de su texto refundido —Capítulos II y IV—, de la LSV, y, en concreto, de los artículos 64 —Pérdida de puntos—, 65 —Recuperación de puntos—, 71 —Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción— 73 —Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la sentencia penal de privación del derecho a conducir vehículos a motor—, del Anexo III, Cursos de sensibilización y reeducación vial, y del Anexo IX, apartado 11, dedicado a las disposiciones específicas sobre cursos de sensibilización y reeducación vial.

El proyecto normativo consta de diez artículos destinados a la regulación de la duración, contenido y requisitos de diversa índole de los cursos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. A su vez, la orden ministerial contiene tres anexos, reguladores del contenido y de los *perfiles* que deben entenderse incluidos en los diferentes tipos de cursos.

II

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo 4.1 del RGPD define los datos personales como “: *toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona*”.

A su vez, de acuerdo con el contenido del punto 2 del propio artículo 4 del RGPD, se define tratamiento como “*cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción*”. Por su parte, la definición de “fichero” se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a “*todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica*”.

El apartado 1 del artículo 2 de la LOPDGDD establece que: “*Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de*

datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”

Pues bien, según se extrae del texto normativo que se informa, se producirán diferentes tratamientos de datos personales, como son los referentes (i) a los datos obrantes en el registro de conductores e infractores (incluso de aquellos datos de índole penal que en dicho registro pudieren figurar), (ii) la inscripción y constancia —en el registro de conductores e infractores— de los cursos superados, y, en consecuencia, de la recuperación parcial de puntos, o de la recuperación del permiso o licencia de conducción, (iii) la inscripción de los alumnos en los cursos, así como la gestión de asistencia del alumnado a las actividades formativas (a través de la firma de partes de presencia u otros medios conformes con la normativa de protección de datos), y (iv) la elaboración de listados de alumnos “perfilados” en función de los tipos de infracciones cometidas, que serán los destinatarios de los cursos que se convoquen.

Dichos tratamientos son efectuados, según los casos, por la propia DGT o por los titulares de los establecimientos donde se desarrollen los cursos. En el caso de la DGT, entendemos que la base jurídica que ampara tales tratamientos sería la prevista en el art. 6.1.e) RGPD: *e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*. En el caso de las entidades que prestan el servicio a los conductores, cabe entender que dicha base jurídica podría ser la del art. 6.1.b) RGPD: *b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales*; y, en algún caso, dicha base jurídica podría ser el cumplimiento de una obligación legal (art. 6.1.c) RGPD), tal y como ocurre con la comprobación de la identidad de los alumnos y el control de asistencia al curso (artículo 8.4 del proyecto de orden). Esta Agencia entiende que esta última obligación deriva directamente de la propia LSV, cuando permite que el titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte de sus puntos asignados se beneficie de su recuperación parcial, realizando y superando con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial (art. 65.4 LSV).

Pues bien, a los efectos que aquí interesan, de todos esos tratamientos que derivan de la norma que se informa, debe hacerse especial hincapié en *cuatro tipos* de tratamientos en concreto. En primer lugar, al derivado de las particularidades del control de asistencia de los alumnos. En segundo término, al tratamiento o conjunto de tratamientos que deriven del pretendido “perfilado” de los alumnos. En tercer lugar, a lo relativo a la realización de formación no presencial (*online*), especialmente, en lo relativo a la verificación de la identidad de las personas afectadas. Y, en último término, al tratamiento de los datos de las personas “víctimas de accidentes de tráfico” que, perteneciendo a una asociación u organización legalmente reconocida, decidan participar en las

correspondientes jornadas formativas.

Así, en lo relativo a la comprobación de la identidad de los alumnos y al control de asistencia, el artículo 8.4 del proyecto, dispone que:

“Los alumnos deberán asistir a la totalidad del curso extremo que se verificará a través de sistemas de parte de firmas u otros procedimientos que cumplan los principios y la normativa de protección de datos personales que deberán realizarse al inicio y al final de cada jornada formativa, así como al comienzo y finalización de cada descanso. La documentación acreditativa de asistencia, además de la del resto de documentación del curso, deberá conservarse durante un plazo de 5 años desde la realización del curso.”

De este modo, no se contempla expresamente en el texto presentado la posibilidad de llevar a cabo la verificación de asistencia y presencia del alumnado mediante “control biométrico”, que, tal y como se expuso recientemente en nuestro informe 0074/2023, sería contrario a la normativa de protección de datos personales.

En la Memoria de Análisis de Impacto Normativo —MAIN— de la disposición que se informa se contienen diversas observaciones, provenientes de diferentes organismos y asociaciones consultados en el trámite de “Audencia e Información pública”, que abogan en favor de este tipo de control de asistencia y seguimiento, pareciendo —*ab initio*— favorable la opinión del órgano consultante por sus comentarios recogidos en las MAIN acerca de las observaciones en relación con la introducción de dicho sistema de control.

Sin embargo, tal y como se observa, finalmente, en la redacción del proyecto que se analiza, no se contiene mención alguna expresa al control biométrico que, tal y como se señaló en nuestro informe 0074/2023, y ahora se reitera:

“En primer lugar, el control biométrico trataría, lógicamente, datos biométricos, que son considerados por el RGPD “datos de categorías especiales” (art. 9 RGPD), y que requieren para su tratamiento, en primer lugar (además de una de las bases jurídicas del art. 6 RGPD), una circunstancia que levante la prohibición de las previstas en el art. 9.2 RGPD, de las que nada se dice o se menciona. Luego no podrían ser tratados.

Cabe aquí salir al paso de la posibilidad de entender que sería posible el tratamiento de esos datos biométricos de acuerdo con el art. 9.1 RGPD, esto es, con el consentimiento del interesado. Sin embargo, el consentimiento ha de ser “libre, específico, informado e inequívoco” (art. 4.11 RGPD), y para que este pueda considerarse libre habrá de haber en primer lugar una verdadera posibilidad de opción por otro sistema de verificación de la asistencia (en caso contrario no habría tal libertad) -véase Considerando 42 RGPD, transcrito más adelante-. Pero la mera

existencia de este sistema alternativo (por ejemplo, mediante el control de firmas a que se refiere el precepto del proyecto) determina que el tratamiento de dichos datos biométricos no pueda considerarse “necesario”, por lo que se incumpliría el art. 6.1.b) o 6.1.c) RGPD, ya que dicha base legal requiere que el tratamiento de dichos datos sea “necesario”. Y no se daría tal condición, tal “necesidad” si existe tratamiento alternativo (Considerando 39 RGPD).

Asimismo, se considera que no existe una relación de equilibrio entre el centro y el alumno que permita considerar dicho consentimiento como libre (véase Considerando 42 RGPD: El consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno).

Además, conforme al art. 35 RGPD, el tratamiento de datos personales de categoría especial a gran escala necesita una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD), que aquí no parece haberse realizado. Esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el prelegislador, en aquellos casos, como el presente, en que los tratamientos puedan tener como base jurídica el art. 6.1.c) del RGPD (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento reguladas por el proyecto, haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la norma (ley, real decreto, etc.) quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica. Dicha EIPD habrá de incorporarse, como permite -casi debería decirse que lo impone, pero en cualquier caso no lo prohíbe- el art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Este precepto es, además, suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del “impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”.

g) Otros impactos: La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma.

No existe, por otra parte, una norma **con rango de ley** lo suficientemente específica que, siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (STC 292/2000 o 76/2019), pueda considerarse que justifique la afectación a dicho derecho fundamental mediante el tratamiento de datos biométricos. Véase art. 8 LOPDGDD. Por ello, no existiendo dicha norma legal, no es siquiera necesario el siguiente paso del análisis: si dicha norma cumple el principio de proporcionalidad que ha de cumplir toda media restrictiva de un derecho fundamental (juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

En definitiva, el tratamiento de datos biométricos, en este contexto, incumpliría el principio de minimización de datos (art. 5.1.c) RGPD), por no ser estrictamente necesario dicho tratamiento (Considerando 39 RGPD: Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios.) No podría basarse en el consentimiento; sería un tratamiento excesivo y no proporcionado, e incumpliría igualmente el principio de licitud (art. 5.1.a) RGPD). Además de los incumplimientos de los arts. 6 y 9 RGPD ya mencionados.

Todo lo anterior tiene su reflejo en la **“Guía sobre la utilización de datos biométricos para el control de presencia y acceso”** publicada por la AEPD el 23 de noviembre de 2023.”

En conclusión, como se ha expuesto, la presente Orden no prevé la concurrencia de sistemas biométricos de control de asistencia y/o presencia, resultando acertado y plenamente conforme con la normativa de protección de datos —y muy especialmente con lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8 y 9 RGPD—, que la verificación de tales circunstancias se lleve a cabo “a través de sistemas de parte de firmas u otros procedimientos que cumplan los principios y la normativa de protección de datos personales que deberán realizarse al inicio y al final de cada jornada formativa, así como al comienzo y finalización de cada descanso. (...)”

III

Cabe, además, realizar alguna consideración en relación con el “perfilado” de los alumnos al que se refieren diversos artículos del proyecto. Así, el artículo 7 de la Orden, dispone que en la programación de los cursos se intentará agrupar a los alumnos que compartan *el mismo perfil* de forma que pueda adaptarse el contenido de la parte común a dicho *perfil*.

A su vez, los artículos 4 y 5 del proyecto prevén igualmente que los participantes en el mismo curso puedan *cumplir el mismo perfil infractor*, para así intentar ajustar a dicho *perfil* el contenido de las materias impartidas, siendo dicho *perfil proporcionado por la Dirección General de Tráfico*, y pudiendo ser el

relativo a “velocidad”, “alcohol y drogas”, “conductas imprudentes”, “conductas imprudentes en motocicleta” o “distracciones”. En este sentido, se dispone incluso la posibilidad, recogida en el *artículo 5.b. —in fine—*, de que el curso que se imparta tras una sentencia judicial sea el de “*perfil penal*”.

Finalmente, siguiendo estas previsiones, los anexos II y III de la Orden, en los que se publica el contenido común de los cursos y de su parte específica, determinan que (i) se procurará que los perfiles de los asistentes a cada curso sean lo más homogéneos posible, y que (ii) el cuadro de materias a impartir dependa del *perfilado previo* de los alumnos.

En la MAIN del proyecto, el órgano consultante expone las razones que aconsejan la consideración de los diversos perfiles infractores en orden a su correspondencia con el contenido de los cursos a impartir. De tal suerte, se señala que *“se introduce el concepto de perfil infractor a fin de permitir una clasificación de los destinatarios en función de las infracciones cometidas y las circunstancias de las mismas, con objeto de posibilitar una personalización de la formación que redunde en un mejor aprovechamiento”*, indicándose que el anexo II desarrolla el contenido de la parte común de los cursos, refiriéndose el anexo III al contenido de la parte específica de los cursos. A su vez, se desarrolla el concepto de perfil de infractor, a fin de posibilitar la creación de perfiles de cursos en razón de 6 perfiles, esto es: velocidad, alcohol y drogas, conductas imprudentes, distracciones, penal y conductas imprudentes en moto, en combinación con 10 áreas temáticas”.

A estos efectos, debe recordarse que el RGPD define la “elaboración de perfiles” como *“toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física”*.

Y de su regulación se derivan dos consecuencias que deben tenerse en cuenta: por un lado, la obligación de informar a los afectados, en el momento de recoger sus datos personales, de informar de *“la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado”*, conforme al artículo 13.2.f) del RGPD.

Pues bien, tal y como se expuso en los Puntos precedentes de este informe, corresponden a la Jefatura Central de Tráfico del Ministerio del Interior —a la Dirección General de Tráfico de dicho Ministerio—, el conjunto de atribuciones dimanantes de los artículos 10 y 86 del RGPD, y de los artículos 10 y 27 de la LOPDGDD. En consecuencia, la llevanza y gestión del registro de

conductores e infractores, con las diversas consideraciones relativas al “perfilado” que derivan del tipo de infracciones cometidas estos, es competencia de dicha DGT, debiendo entenderse que el “perfilado” de que se trata *no es más que la mera clasificación de los infractores* en diferentes grupos en función de su más correcta adecuación a los cometidos formativos de que se trata.

Sin embargo, en todo caso, si el órgano consultante pretendiese llevar a cabo decisiones automatizadas, sin participación y/o intervención humana, resultaría necesario, en todo caso, que respetase lo dispuesto, respecto de las decisiones automatizadas, en el artículo 22 del RGPD:

“Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles

1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:

a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento;

b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, o

c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.

3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.”

No obstante, del texto sometido a informe no resulta que las decisiones de perfilado realizadas por el órgano consultante, obedezcan a “decisiones automatizadas” y realizadas sin intervención humana. A dichos efectos, esta Agencia entiende que las consideraciones de hecho y de derecho que se

contienen tanto en la MAIN de la norma que se analiza, como en el propio texto del proyecto de orden que se informa, **resultan suficientes para justificar la consiguiente distinción y reparto de los infractores** (mediante **simple perfilado en categorías**), **sin que resulte necesario**, a los efectos del “perfilado” de que se trata que se proceda a realizar **una evaluación de impacto** de este tipo de tratamiento, siempre que (i) se utilicen únicamente los datos personales de los que ya disponga el órgano consultante en su registro de conductores e infractores, y (ii) que se acoten los efectos del perfilado a los fines pretendidos de la adecuación formativa de los alumnos.

IV

En cuanto a utilización de medios electrónicos para el desarrollo de una parte específica de los cursos de forma *online*, mediante teleformación o aula virtual, siempre *“que se utilice una plataforma que cuente con un registro de conexiones y actividad en el que se identifique a los alumnos que participan y deje constancia de la fecha y el tiempo de conexión, siendo necesario para la autenticación de los alumnos el establecimiento como mínimo de un doble factor”*, **dicha previsión no se opone a lo dispuesto en lo relativo a la protección de datos de carácter personal**. No queda claro, en cualquier caso, a qué se refiere exactamente ese sistema de “doble factor”, por lo que para el caso de que implique, o pueda implicar, tratamientos de datos biométricos, se reitera aquí lo relativo al carácter contrario de dichos tratamientos, en los términos expuestos, a la normativa de protección de datos personales, y la absoluta interdicción de los sistemas de control biométricos a la que se refiere los Puntos anteriores del presente informe.

El uso de tecnologías adecuadas por los gestores de los cursos deberá garantizarse por la propia Dirección General de Tráfico sobre la base de los principios de “integridad y confidencialidad”, mediante la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas, de acuerdo con el *artículo 5.1.f RGPD*, y de conformidad con su “responsabilidad proactiva”, a la que se refiere el *artículo 5.2 RGPD*.

Finalmente, en lo relativo a la intervención de “víctimas de accidentes de tráfico”, realizada de *forma voluntaria* y en el marco de su pertenencia a una determinada organización o asociación debidamente registrada y reconocida por la Dirección General de Tráfico, esta Agencia entiende que la referida participación formativa encaja en las circunstancias del artículo 9.2 RGPD que, en su caso, levantan la prohibición previa de tratamiento de los datos personales del apartado 1 del propio artículo 9 RGPD, en los supuestos en los que hubieren de tratarse los datos de dichas víctimas referidos a su estado de salud, o cualquiera otros de los señalados en dicho precepto.

En todos estos casos, además del **consentimiento** del afectado —*ex artículo 9.2 a) RGPD*—, debe entenderse que el afectado, “víctima de un

accidente de tráfico”, **hace “manifiestamente públicos” dichos datos —ex artículo 9.2 e) RGPD—**, permitiendo su tratamiento, más allá incluso de las previsiones de la letra d) del artículo 9.2, y, en fin, concurriendo el supuesto de legitimación del **artículo 6.1. a) RGPD**.